



 **realidad
económica**

Nº 335 · AÑO 50

1º de octubre al 15 de noviembre de 2020

ISSN 0325-1926

Páginas 73 a 101

POLÍTICAS PÚBLICAS

El postpostneoliberalismo sudamericano: una mirada desde el análisis de las políticas sociales*

Nicolás Dvoskin** y Mayra Bevegni***

* Una primera versión de este trabajo se presentó en el XIV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración, en Salamanca, en un panel sobre el giro a la derecha de la política latinoamericana, y luego en el IX Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina en Bucarest, ambas en julio de 2019.

** Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Investigador-CEIL/CONICET. Becario Posdoctoral ALEARG en el Instituto Central de Estudios Latinoamericanos (ZILAS) Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Ostenstr. 26, 85072, Eichstätt, Alemania. nicolas.dvoskin@ku.de

*** Lic. en Ciencia Política (UDELAR) - Maestranda en Desarrollo y Políticas Públicas (UNL). Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. mayrabevegni@hotmail.com

RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: enero de 2020

ACEPTACIÓN: julio de 2020



Resumen

Hace unos quince años, Emir Sader propuso el concepto de postneoliberalismo, asumiendo que la era neoliberal en América del Sur había llegado a su fin. Sader, crítico del neoliberalismo, coincidía sin embargo con él respecto a la no-búsqueda de homogeneidad social. Quizás como resignación, el postneoliberalismo nunca se propuso la igualdad sino la inclusión, y la política social cumplió un rol muy importante. Esto refiere a objetivos económicos menos pretenciosos, pero a una apertura política mayor: si no tenemos que ser todos iguales, podemos permitir la diversidad. Desde 2015 estamos presenciando un giro conservador tanto en el mundo como en la región. En América del Sur se trata de una avanzada postpostneoliberal, que conjuga un ideario económico ortodoxo con una retórica tradicionalista que se opone a la diversidad. A partir de un análisis de la política social en las nuevas derechas sudamericanas intentamos acercarnos a las nuevas concepciones sobre la relación entre Estado y mercado, para así comprender mejor el significado de las nuevas derechas (postpostneoliberales) en la región.

Palabras clave: Neoliberalismo - Postneoliberalismo - Estado - Política social - Legitimidad

Abstract

South American post post neoliberalism: a view from the analysis of social policies

About fifteen years ago, Emir Sader proposed the concept of post neoliberalism, assuming that the neoliberal era in South America had come to an end. Sader, a critic of neoliberalism, nevertheless agreed with him regarding the non-search for social homogeneity. Perhaps as a resignation, post neoliberalism never proposed equality but inclusion, and social policy played a very important role. This refers to less pretentious economic objectives, but to greater political openness: if we do not have to be all equal, we can allow diversity. Since 2015 we are witnessing a conservative turn both in the world and in the region. In South America it is a postpostneoliberal advance, which combines an orthodox economic ideology with a traditionalist rhetoric that opposes diversity. From an analysis of social policy in the new South American right-wing, we try to approach the new conceptions about the relationship between the state and the market, in order to better understand the meaning of the new (postpostneoliberal) right-wings in the region.

Keywords: Neoliberalism - Post Neoliberalism - State - Social policy - Legitimacy

Presentación del trabajo

Poco después del final del siglo XX, el sociólogo Emir Sader lanzó a debate un concepto polémico: el *postneoliberalismo* (en adelante PNL), asumiendo que la era del neoliberalismo (en adelante NL) en América del Sur había llegado a su fin (Sader, 2008). La experiencia del “No al ALCA” de 2005 –impulsada principalmente por Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina– daba a entender que el continente se encaminaba hacia procesos de resignificación de la democracia a partir de gobiernos que se decían a sí mismos populares y que compartían, no solo una mirada geopolítica sudamericanista, sino una lectura crítica del NL.

En un texto sobre la experiencia de los PNLs de toda la región, Francisco López Segrera describe las dieciocho características comunes del PNL latinoamericano, entre las que destacamos: la recuperación del control de sectores estratégicos por parte del Estado, pero sin cuestionar en forma drástica el sistema capitalista existente; el rechazo al Consenso de Washington sin modificar el carácter extractivista de las economías; la adopción de nuevas formas de integración regional como CELAC o UNASUR, en desmedro de la dependencia de los intereses de Estados Unidos; los programas de redistribución de la riqueza y de populismo asistencialista; y la alianza con movimientos sociales e indígenas, entre otras (López Segrera, 2016, pp. 64-67). La conceptualización de Sader permitió que se construyera el concepto de PNL como una certeza de que los años del NL habían quedado atrás para siempre, que incluso podía expresar un camino anticapitalista. Decía Sader (2008) que

...el postneoliberalismo es el camino de negación del capitalismo en su fase neoliberal, que mercantiliza todo, en que todo tiene precio, todo se compra, todo se vende. El postneoliberalismo, al contrario, afirma derechos, valores, esfera pública, ciudadanía y ahí se da la disputa fundamental de nuestro tiempo, en que

América Latina es el escenario más importante, el eslabón más débil de la cadena neoliberal” (p. 43).

En la literatura anglosajona se puso de moda el concepto de *pink tide* (marea rosada) para describir a este fenómeno, haciendo eje en el contagio que los procesos populares de unos países tuvieron en los otros (Spronk, 2008). Emerge la pregunta sobre si estos procesos fueron solo una reacción a las crisis del NL o si tuvieron fundamentos propios, y en este sentido es que necesariamente surgen comparaciones con el período pre-NL. ¿Se trataba de un retorno a las políticas de industrialización sustitutiva, con la consecuente necesidad de salarios altos? Al parecer, el PNL coincidía con el NL y disentía con el pre-NL respecto a la no-búsqueda de homogeneidad social. Quizás como resignación, el PNL nunca se propuso la igualdad sino la inclusión, y la política social, a partir principalmente de transferencias condicionadas de ingresos, cumplió un rol central. A esto nos dedicamos en la sección II de este trabajo.

La apuesta por la heterogeneidad inclusiva refiere a objetivos económicos menos pretenciosos, pero a una apertura política mucho mayor: si no tenemos que ser todos iguales, podemos permitir la diversidad. No es casual, entonces, que éste haya sido el período de apertura en toda América Latina de reivindicaciones de pueblos originarios, feminismos y disidencias sexuales. Inclusión en la diversidad, antes que igualdad. Dependiendo del caso, se articularon demandas desde abajo con impulsos desde los propios gobiernos.

Hacia mediados de la segunda década del siglo se empezó a evidenciar un fuerte giro a la derecha en la región. Esto ya había sido identificado por López Segrera en 2016 tras los triunfos electorales de Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil. Este giro, cuya mayor expresión es el gobierno de Jair Bolsonaro, se legitima principalmente desde este combate a las diversidades y disidencias. Detrás están presentes las reformas promercado, pero respecto a las políticas sociales el panorama es mucho más difuso.

Jugando con los términos de Sader, nos proponemos preguntarnos por el *postpostneoliberalismo* (PPNL). ¿Qué diferencias tiene con el primer NL? En la sección III de este trabajo definimos sucintamente la agenda de la política social del PNL y su crítica al pasado NL, en la sección IV explicamos las lógicas de legitimación del giro a la derecha a nivel mundial, y en la sección V discutimos la política social del PPNL y la reconfiguración de la relación entre Estado y mercado. En la sección VI presentamos las conclusiones preliminares. En síntesis, en este trabajo nos proponemos preguntarnos qué rol cumple la política social, qué tipo de política social se legitima y qué relación se está estableciendo entre la democracia política y los derechos sociales en la América del Sur de hoy.

Marco teórico: modelos de acumulación, políticas sociales y utopías

En esta sección presentamos el esquema teórico desde el que abordamos el problema de la legitimación de la política social como forma de interpretar la relación entre Estado y mercado. Un desarrollo preliminar de esta perspectiva es el que hemos planteado en Dvoskin (2019b). Esquemáticamente, definimos cuatro momentos de la historia latinoamericana, en función de los paradigmas sobre el desarrollo preponderantes: desarrollismo temprano (desde los 50 hasta mediados de los 60), desarrollismo tardío (desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70), NL (desde mediados de los 70 hasta el cambio de milenio) y PNL (durante la primera década del siglo XXI). Precisamente, la pregunta que intentaremos responder hacia el final del trabajo es cómo incorporar al PPNL en un esquema con estas características.

A tal fin, un punto de partida puede ser la distinción entre conceptos: seguro social, seguridad social, justicia social, desarrollo social, asistencia social, inclusión social. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿En qué momento de la historia se impuso cada uno? ¿Cómo se relacionan las políticas públicas y las utopías sociales según cada uno de ellos?

Seguridad social (en inglés, *social security*) es un concepto de principios del siglo XX que hacia los años 50 se transformará de un término técnico en un anhelo político, al tiempo que se diferenciará del concepto de *seguro social* (en inglés, *social*

insurance). Ambos, anteriormente, eran entendidos como sinónimos. El seguro social será comprendido como un medio para alcanzar el status de seguridad social. Hacia los 70, el concepto de seguridad social volverá a ser entendido en términos técnicos, principalmente a partir del arribo de las teorías neoclásicas sobre la reforma previsional (Dvoskin, 2014) debido a que en inglés el término *social security* muchas veces refiere solo al sistema de pensiones a la vejez.

La *justicia social*, por su parte, será una importante utopía entre los años 40 y principios de los 60, lo que coincide con la primera etapa de los desarrollismos latinoamericanos. Su utopía se construye con la consolidación de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Ésta, si bien distanciada de la del comunismo, refiere a una sociedad homogénea que se corresponda con el paradigma productivo *fordista*: bienes homogéneos producidos a gran escala y consumibles por una clase media pujante. El crecimiento económico acelerado hará que este proceso sea irrefrenable, pero la protección social –bajo la forma de protecciones contributivas sobre la nómina salarial– es necesaria para asegurar que la oferta de bienes se cruce con la demanda efectiva. Solo si hay pleno empleo formal las protecciones contributivas pueden entenderse como universales. El núcleo de la búsqueda de la justicia social es que las políticas homogéneas llevarán a una sociedad homogénea.

El *desarrollo social*, por su parte, surge como concepto a mediados de los 60, precisamente para explicar la diferencia entre el mero crecimiento económico y el bienestar social (Seers, 1970). La política social jugará aquí un rol mucho más importante, precisamente porque se entenderá que las políticas de crecimiento de la década anterior no habían redundado en una eliminación de la pobreza o de los males estructurales. El diagnóstico será el de la heterogeneidad estructural –es decir, la coexistencia de sectores de alta y baja productividad–, y la política social específicamente direccionada hacia estos sectores rezagados o abandonados pasará a ser entendida como un canal para el desarrollo. En este sentido, en el desarrollismo tardío serán las políticas heterogéneas las que nos lleven a nuestra utopía de una sociedad homogénea.

El ascenso del NL llevará al abandono de las propuestas de las décadas previas. El nuevo paradigma hegemónico sostendrá que el mercado puede resolver todos nuestros problemas y que cualquier intento por regularlo llevará a resultados negativos. Sin embargo, mientras algunos discursos del NL extremo renegarán de cualquier tipo de política social, otros entenderán que los procesos de transformación estructural propuestos demandarán tiempo y que, entonces, la política social será necesaria para sostener políticamente la transición hacia una economía plena de mercado (Vilas, 1997). Esto fue parte de la agenda que las principales organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, empezaron a promover desde mediados de los 90 (Banco Mundial, 1997), y marca el origen del concepto de *asistencia social*: ésta no se concibe como un reconocimiento de derechos, no debe estar disponible para siempre, su otorgamiento debe estar debidamente justificado y su monto debe ser pequeño, como para no alterar el salario de equilibrio del mercado de trabajo privado (Felder, 2007).

Así, en el largo plazo no debería existir ningún tipo de protección social. Entonces, exceptuando las políticas asistenciales de corto plazo que proveerán la estabilidad política necesaria para las transiciones promercado, las políticas sociales han de ser homogéneas. Pero el NL va a rechazar las virtudes de una sociedad homogénea, en tanto la heterogeneidad es el principal incentivo que motiva a las fuerzas del mercado. En este sentido, políticas homogéneas o criterios homogéneos nos llevarán a la utopía de una sociedad heterogénea.

Por último, el PNL expresará la caída en desgracia de las utopías del NL. Las graves crisis económicas llevarán a una reconfiguración de las legitimidades, y en América Latina estos procesos de deconstrucción del NL fueron acompañados por el reconocimiento de derechos de minorías o grupos históricamente discriminados, como las comunidades indígenas, las mujeres, los colectivos LGBTTIQ, etc.

Simultáneamente se reconocen la imposibilidad y la inconveniencia de la homogeneidad social, precisamente porque la diversidad y el pluralismo se imponen como tendencias. Este proceso de reconocimiento de la diversidad se está dando en todo el mundo, pero solo en América Latina esto se ha enmarcado en las críticas al desastre del NL. En este sentido, la protección social toma ahora el nombre de

inclusión social: todos habremos de ser diferentes, pero todos debemos estar incluidos en una sociedad heterogénea. Hemos de recibir diferentes tratos y los grupos sociales excluidos han de ser priorizados. Por eso, en el PNL hablaremos de políticas heterogéneas que nos han de llevar a una sociedad heterogénea.

El esquema recién descrito puede ser resumido en **cuadro 1**.

Entonces, la principal diferencia entre el período que se abre después del NL y el que culmina antes de él es la búsqueda de homogeneidad social. Comparando viejos desarrollismos con el PNL, encontramos que en el segundo las utopías son de inclusión, pluralismo y diversidad. Quizás sea ésta una forma de lidiar con la presente y aparentemente inquebrantable tendencia a la desigualdad económica. Pero si nos alejamos de las miradas economicistas la heterogeneidad inclusiva puede ser vista positivamente. Quizás la inclusión social pueda ser entendida como un concepto nuevo que combina las críticas al NL con el reconocimiento de las diversidades. En este sentido, ¿cómo se configuran las utopías del PNL y qué las diferencia de las viejas utopías de los 60 y 70?

Al igual que los Estados de bienestar europeos, el programa desarrollista latinoamericano incluía una convocatoria implícita a determinado orden social. De hecho, durante su etapa temprana, que coincide con un período de democracias en

Cuadro 1.
Políticas sociales y concepción de la sociedad. Evolución histórica.

		Sociedad utópica			
		Homogénea		Heterogénea	
Política social	Homogénea	Desarrollismo temprano		Neoliberalismo (NL)	
		1940s a 1960s	Justicia social	1980s a 2000s	Asistencia social
	Heterogénea	Desarrollismo tardío		Postneoliberalismo (PNL)	
		1960s a 1970s	Desarrollo social	2000s	Inclusión social

todos los países, se creía en la posibilidad de que los conflictos políticos tuvieran una solución técnica. Es decir, el crecimiento de la productividad eventualmente eliminaría cualquier tensión. El desarrollismo tardío no fue tan ingenuo. La imposibilidad de una solución técnica a los conflictos políticos se hizo evidente y emergieron regímenes autoritarios institucionalizados. En comparación con el período previo, la necesidad de cierto orden social –ahora atravesada en muchos países por la moralidad cristiana o el llamado al “comunitarismo”–, era un reconocimiento de las dificultades del proceso económico. Pero, independientemente del camino a seguir, nos referimos a una época que estaba atravesada por utopías optimistas, aun cuando muchas veces éstas eran contradictorias entre sí.

El desarrollismo de mediados del siglo XX proyectaba para el mediano plazo una América Latina capitalista y de altos ingresos. Esperaba una sociedad organizada en familias nucleares heterosexuales, donde el hombre del hogar estuviese empleado y ganara un salario suficiente para alimentar a una esposa que permaneciera en casa, a sus hijos, ahorrara y aumentara su consumo de bienes durables año a año. Algunos programas incluso planteaban que el desarrollo acelerado podría eliminar el flagelo del trabajo femenino.

El NL rechaza la posibilidad de una sociedad organizada desde el gobierno: las sociedades han de ser organizadas por el mercado a través de la correcta provisión de incentivos para el progreso y la responsabilidad individuales. El esfuerzo es premiado y el desinterés castigado. Esto abrió la puerta a un mayor reconocimiento de las demandas por el respeto a la diversidad. Si existen distintas maneras de organizar nuestras vidas, y es el mercado el que las aprueba o desaprueba a través de sus premios y castigos, ¿puede la moral contradecir al mercado? Al mismo tiempo, si los incentivos individuales han de promover el bienestar, ¿tiene sentido seguir pensando en la igualdad social como utopía?

Desde ya, mientras muchos discursos del NL defendían y promovían la diversidad, sus consecuencias concretas muchas veces reforzaban las tradicionales estructuras de poder. El retiro del Estado arrojó a los hogares –y dentro de ellos, a las mujeres– las responsabilidades sobre los cuidados. La reducción de los salarios reales llevó a que el ingreso de un miembro del hogar no alcanzase para satisfacer

las necesidades de toda la familia. Las mujeres se lanzaron en masa al mercado laboral, en muchos casos bajo condiciones de informalidad y bajísimos salarios, pero simultáneamente mantuvieron su responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado.

Como afirmamos antes, hacia mitad de los 90 las mismas instituciones internacionales que promovieron las reformas del NL reconocieron que éstas no habían sido tan sencillas y aquí surgió la asistencia social como la principal forma de política social (Draibe, 1994). Muchos de los programas sociales fueron diseñados específicamente para proteger mujeres. Se trató tanto de programas pensados para mejorar las capacidades productivas o la empleabilidad como de transferencias monetarias condicionadas que priorizaron a las mujeres como receptoras de las asignaciones. El debate acerca de las consecuencias en términos de igualdad de género de estos programas, atravesando el empoderamiento pero al mismo tiempo la reproducción de estructuras de sumisión, aún continúa abierto.

La crisis del neoliberalismo y la política social postneoliberal

Tras las crisis del NL las transferencias condicionadas no solo no se eliminaron sino que se expandieron. Lo mismo sucedió con programas de pensiones no contributivas, por ejemplo a la vejez, que tuvieron muchísima acogida debido a que eran muchos los ancianos que, debido al alto desempleo y la alta informalidad durante el NL, no habían podido retirarse con todos los años de aportes (Rofman et al., 2014). Aunque los marcos institucionales de estas políticas no fueron tan distintos a los del NL, su legitimación discursiva fue muy diferente. En los países en los que la crisis del NL no fue tan aguda, como Chile, las diferencias fueron menores. En otros –como los ya mencionados Argentina, Bolivia o Brasil–, fueron sustanciales.

El arribo del nuevo siglo nos hizo darnos cuenta de que las transformaciones estructurales causadas por el NL tendrían consecuencias de largo plazo. Donde había habido pleno empleo formal a mediados del siglo XX, la probabilidad de replicar esa situación cincuenta años después se reconoció muy baja. Se empezó a hablar de pobreza estructural y de inempleabilidad. En ese sentido, la política social

dejó de ser transitoria para convertirse en permanente. Enormes grupos sociales pasaron a requerir ayuda por mucho tiempo antes de poder conseguir un empleo formal. Las transferencias condicionadas de ingresos se consolidaron como una invención latinoamericana de exportación, principalmente porque demostraron una enorme capacidad para combatir la pobreza extrema a un costo relativamente bajo. Sin embargo, lo limitado de sus montos en la mayoría de los casos hizo que los impactos sobre pobreza no extrema o sobre las condiciones de vida de los sectores medio-bajos no hayan sido tan profundos.

En este sentido nos podemos preguntar si es posible convertir esta política social ampliada en un medio para una sociedad igualitaria. La respuesta, inmediata, es que ese objetivo habría requerido cambios económicos, políticos y sociales mucho más radicales. La herencia material del NL y las restricciones políticas imposibilitaron reconvertir sus crisis en transformaciones profundas que nos pudieran llevar hacia la igualdad. En cambio, el concepto que se impuso y la búsqueda que se encaminó fue la de la inclusión. De alcanzar el objetivo, no seríamos todos iguales, pero nadie quedaría afuera.

La persistente desigualdad económica es consecuente con la heterogeneidad social. ¿Todas las familias han de ser iguales? Aunque el fenómeno sea global, América Latina pasó a estar atravesada por un período de legitimación de demandas asociadas a derechos de minorías. El matrimonio igualitario, las autonomías de los pueblos originarios, las cuotas raciales o para discapacitados, la identidad de género y otras agendas se impusieron en el escenario político. La utopía de la inclusión, quizás entendida como un autorreconocimiento de las imposibilidades de una transformación social mayor, tuvo la virtud de poder incorporar estos reclamos mucho más fácilmente que cualquier utopía igualitaria pues, precisamente, no todos debemos ser iguales.

Desde ya, tanto el desarrollismo tardío como el PNL compartieron como premisa la necesidad de la redistribución del ingreso como un elemento necesario de su intervención económica y social. Por lo menos en el corto plazo, para que algunos reciban algo más otros deben resignar algo también. Durante la primera década del siglo la desigualdad disminuyó prácticamente en toda América Latina, incluso

en aquellos países en los que no se experimentaron cambios políticos sustanciales respecto de la década anterior.

Las condiciones externas fueron beneficiosas durante la primera mitad, principalmente a partir del aumento de los precios de exportación, pero esto viró completamente después de la crisis financiera mundial de 2008, y las experiencias PNL comenzaron a tambalear. En algunos casos hubo reversiones menores y en otros cambios importantes. Diez años después, el giro en la región pareció ser prácticamente total, pero el proceso fue paulatino. La constitución de un PPNL tuvo hitos fundamentales –como las elecciones de Bolsonaro y Macri, el giro de Lenín Moreno en Ecuador o el rechazo al referéndum por la paz en Colombia–, pero de hecho la conformación de la deslegitimación del intervencionismo PNL se fue dando de a poco, y tanto el reciente triunfo de Alberto Fernández en Argentina como las protestas masivas en Ecuador, Chile y Colombia podrían llegar a dar cuenta de un cambio de tendencia.

El cambio de década político, económico y comunicacional

En esta sección proponemos enfocar el problema del giro conservador hacia el PPNL desde la perspectiva comunicacional. ¿Cómo se han conjugado los cambios sociales con las tendencias globales en materia de medios de comunicación? ¿En qué sentido la enorme transformación mediática ha facilitado el camino del PPNL, y qué rol ha jugado allí la apertura a la deslegitimación de la política social previa¹?

Solo por dar un ejemplo, en 2009 se sancionó en la Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), luego derogada por Macri poco después de asumir la Presidencia. Fue quizás uno de los debates que más hondo caló en la esfera pública. Para ciertos sectores quedó bastante claro el rol que habían jugado los grandes grupos concentrados de medios de comunicación en la legitimación del NL en América Latina. Todos los gobiernos de signo PNL sufrieron durísimos

¹ Algunas de las apreciaciones vertidas en esta sección han sido expuestas en Dvoskin (2019a), donde se construye un argumento similar para explicar la difusión masiva de ideas anarcoliberales, principalmente en Argentina.

embates por parte de las principales cadenas mediáticas, reforzados por la connivencia mediático-judicial. En este sentido, la LSCA permitió discutir los límites de la libertad de expresión en sentido positivo ante procesos de concentración económica. Permitted explicitar cómo las desigualdades en el acceso a la palabra legitiman y reproducen la desigualdad. Sin embargo, los alcances del debate fueron limitados.

Lo que proponemos aquí es que gran parte de la discusión acerca de esta ley ha quedado hoy obsoleta ante los cambios en las comunicaciones. La expansión de las redes sociales y la posibilidad de que los usuarios no solo consuman información sino que la generen y compartan modificaron rotundamente lo que entendemos por libertad de expresión. En cierto sentido, uno de los conceptos más fuertes del debate de la LSCA, el de la “democratización de la palabra”, parecía asegurado por el avance tecnológico, sin necesidad de dar una disputa política al respecto. Eso se pensaba en 2011, cuando se escuchaba que las redes sociales habían canalizado la “primavera árabe”. La censura clásica, entendida como la prohibición explícita de ciertos contenidos, era incapaz de contenerlas.

Sin embargo, las estrategias comunicacionales de los sectores dominantes se adaptaron para encontrar nuevos tipos de intervención, precisamente a partir de la sensación de empoderamiento de los usuarios. Ante el crecimiento de la desigualdad, con grandes crisis económicas en los países centrales y graves catástrofes humanitarias en países periféricos que repercutieron en los países centrales a partir de las migraciones masivas, las redes han permitido que los usuarios canalicen estos enojos. Pero éstas tienen algoritmos peculiares, que hacen que los usuarios tiendan a vincularse principalmente con otros que piensan parecido. Esto ha permitido, en conjunción con la posibilidad de canalizar las frustraciones y los enojos con un tuit o un “posteo” alimentada por la posibilidad de esconderse detrás de un nombre falso, el resurgimiento de discursos de odio como racismo, xenofobia, homofobia o misoginia.

Estos discursos de violencia y discriminación, sumados a la difusión de lo que hoy se conoce como *fake news*, han permitido el despliegue de campañas electorales de una extrema derecha que –al contrario de las derechas de las últimas dos

décadas, recludas en el fin de las ideologías– se presenta explícitamente como derecha. La política retoma un discurso violento donde se conjugan la desinformación, la pretensión de moralidad y la defensa del *statu quo* o de la propiedad privada. Se trata de una actitud abiertamente conservadora y rebelde –o antisistema– al mismo tiempo. En todos los casos, pareciera que esta extrema derecha se vale de la posibilidad de brindarles a los ciudadanos explicaciones simples y externas a los problemas sociales que ellos mismos padecen y que los enojan. A través de las redes sociales se encuentran formas otrora inexistentes de canalizar estos enojos. Y el racismo, la misoginia y la xenofobia están a mano.

En los países desarrollados, la extrema derecha llega con facilidad a sectores medios y medios-bajos que sufren las consecuencias negativas de un proceso acelerado de concentración de los ingresos, pero que encuentran en la afluencia de inmigrantes y refugiados una explicación más sencilla para sus pesares. Esto incluye al discurso del presidente Donald Trump en Estados Unidos y al de los partidarios del Brexit en el Reino Unido. En estos países se popularizó el concepto de *alt-right* (o derecha alternativa). Frente a un NL estándar, implícito, hegemónico, las derechas alternativas son provocadoras, explícitas, contrahegemónicas.

En América Latina, donde las llegadas de inmigrantes no son un tema central, los ejes discursivos de la extrema derecha son dos. El primero de ellos es la moralidad: el proponer que las crisis sociales se basan en una modernidad carente de valores y buenas costumbres, lo que resalta el rol de la familia tradicional y justifica los embates contra los movimientos LGBTTIQ, la llamada “ideología de género”, y el feminismo, haciendo hincapié en el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo, la identidad de género o la educación sexual. El segundo de ellos es la exacerbación de la libertad de mercado: la falta de empleo se explica por las altísimas presiones tributarias y los Estados paternalistas omnipresentes. Como consecuencia es necesario hacer brutales ajustes fiscales, incluyendo despidos masivos y privatizaciones.

En las recientes elecciones en Argentina las candidaturas de extrema derecha de Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert expresaron estos dos caminos. En Uruguay este papel lo jugó Guido Manini Ríos con su nuevo partido Cabildo Abierto

y en Bolivia lo hizo el pastor evangelista Chi Hyun Chung. En el discurso de uno de los autores del golpe que derrocó a Evo Morales, Fernando Camacho, encontramos muy fielmente representado este extremismo. Sin embargo, la expresión más acabada de esta alianza discursiva entre el moralismo evangélico y el NL económico es la figura del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Un problema adicional es la penetración de estas tendencias hacia dentro de los propios partidos que en principio habrían de reportar a un NL más clásico, como Macri, Piñera o Iván Duque. Estos gobiernos se ven fuertemente presionados por sectores internos o potenciales votantes y grupos de interés que se posicionan a su derecha en tanto consumidores y replicadores de estos nuevos discursos de odio.

Algunos casos sudamericanos: la política social en la agenda postpostneoliberal

En esta sección nos proponemos presentar los primeros resultados empíricos de esta investigación, que se limitan a las situaciones en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. La pregunta central es qué rol juega la (crítica a la) política social en la nueva configuración entre políticas públicas, materialidades económicas y utopías sociales en la América del Sur PPNL.

En el caso de Chile, el discurso del presidente Sebastián Piñera –quien asumiera su segundo mandato en marzo de 2018– hace eje en preservar la familia como el principal sostén de la sociedad. Según su programa electoral (Piñera, 2017):

...la familia, como núcleo esencial de la sociedad, es el eje fundamental de nuestro esfuerzo solidario. Sin ella, y sin una pujante sociedad civil, el individuo es frágil y tiende a buscar en el Estado o en algún caudillo aquella protección y seguridad que le falta. Esa es la base de las ideologías colectivistas, que reemplazan la fuerza y la libertad que nos dan nuestras asociaciones naturales por la sumisión a un poder superior supuestamente benefactor. (p. 90)

En este sentido, en 2018 Piñera reformuló el Ministerio de Desarrollo Social y lo convirtió en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia. En su inte-

rior se crearon dependencias vinculadas a la protección de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en situación de calle, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas. Sin embargo, no se observan espacios para personas sujetas a otros tipos de vulnerabilidades: ni enfoques en género y violencia de género, como tampoco temas de diversidad sexual (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

En esta línea podemos ubicar la postura expuesta por Piñera respecto de la potencial ley de interrupción voluntaria del embarazo. En varias oportunidades el presidente chileno se ha manifestado en contra de promulgar esta norma. “Eso es terapia y no aborto, pues el objetivo es salvar vida madre y no destruir vida de un nuevo ser, esencialmente inocente y vulnerable”, sostuvo en su Twitter (2014). De hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet en 2017 se sancionó la ley de regularización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales. En marzo de 2018, al asumir Piñera, se reformuló la ley, autorizando a las instituciones privadas a objetar en caso de que no estén de acuerdo en realizar los abortos. La postura antiaborto del presidente Piñera puede relacionarse con su estrecha y visible relación con las iglesias evangélicas de Chile.

En cuanto a la política social, la principal innovación de Piñera se dio en el último año de su primer mandato, cuando decidió reemplazar el programa Chile Solidario, creado durante el gobierno de Ricardo Lagos, por el del Ingreso Ético Familiar. Si bien su denominación y su fundamentación refieren a una matriz cristiana que lo hacen más compatible con los postulados de la derecha, lo cierto es que es un programa más comprometido presupuestariamente que su antecesor. Sin embargo, la principal diferencia –que explica las mayores erogaciones– es su componente de inserción laboral y su novedoso incentivo al microemprendimiento (Larrañaga et al., 2015). En este sentido, si bien es menos frugal, el componente que se agrega es más cercano a la meritocracia o a la legitimación neoliberal de la política social.

De hecho, desde una perspectiva económica, el actual gobierno de Piñera viene llevando a cabo un profundo ajuste que ha frenado algunas de las iniciativas fuertes de ampliación del gasto social del último gobierno de Bachelet. En este sentido, en

mayo de 2019 se registraron los primeros estallidos populares, en los que organizaciones sociales y estudiantiles salieron a la calle para lograr un freno a las políticas neoliberales del gobierno. Estas protestas se repitieron de forma mucho más amplia en octubre de 2019, obligando al gobierno a dar marcha atrás en varios ajustes y habilitando un proceso político con resultados aún inciertos.

En el caso de Uruguay, desde 2005 gobierna el Frente Amplio, y desde 2014 ejerce la presidencia Tabaré Vázquez. Durante estos gobiernos –principalmente el de José Mujica entre 2010 y 2014– se consagraron muchas leyes de ampliación de derechos y se consolidó una propuesta claramente postneoliberal en términos de derechos civiles e inclusión de pluralidades, pero relativamente limitada en términos de las transformaciones económicas.

En octubre de 2019 se celebraron las elecciones nacionales, donde el Frente Amplio, con la candidatura de Daniel Martínez, terminó primero, pero no alcanzó a ganar en primera vuelta. El segundo fue Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. En noviembre se realizó la segunda vuelta, para la cual el candidato del Partido Nacional recibió el apoyo explícito de otros cuatro partidos y pudo alzarse con el triunfo por una diferencia muy ajustada. El perfil que tomaría el nuevo gobierno, que asumió en marzo de 2020, era todavía incierto.

En este sentido, durante todo 2019 se vivió en Uruguay un gran despliegue de las distintas campañas políticas, las cuales naturalmente recurren al marketing electoral. A los fines de este trabajo es interesante observar los mensajes políticos que se propusieron desde los espacios opositores de derecha. Tanto desde los partidos tradicionales, como el Partido Colorado y el Partido Nacional, como desde referentes externos como el ya mencionado Manini Ríos, encontramos reacciones contrarias a las políticas sociales y de derechos establecidas durante los gobiernos del Frente Amplio, tales como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la identidad de género y la reciente ley integral para protección de personas trans.

Solo por dar un ejemplo, la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso sostuvo en un programa de televisión: “Me seguiría expresando en contra del aborto,

pero en Uruguay el tema ya está laudado. No desandaría el camino, pero trataría de mejorar la norma”².

La ley de matrimonio igualitario fue aprobada en 2013, no sin enfrentarse a duros discursos críticos por parte de organizaciones conservadoras, tales como la Asociación Cristiana de la Salud, cuya postura contraria al proyecto, leída en el recinto por el diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla, sostenía que este tipo de proyecto “hace temblar las bases de las instituciones de la familia, la sociedad, el Estado de derecho [...] y que pone en peligro la reproducción de la especie” (Uy.Press, 2013). La mayoría de los votos en contra de esta ley provino del Partido Nacional, que más tarde atravesó las mismas dificultades a la hora de plantearse la propuesta de ley de identidad de género. En este sentido, ya en 2014 muchos dirigentes del partido sostenían que la diversidad sexual era un tema muy difícil de tratar y debatir dentro del partido (Montevideo Portal, 2018).

En tanto, un tópico que está atravesando a la región es la influencia cada vez más fuerte de los grupos evangelistas en la política. En Uruguay, estos se han ido insertando inorgánicamente en el Partido Nacional. Según Natalia Uval (2018), del periódico La Diaria, “a diferencia de países como Brasil, donde hay una bancada que se define como evangelista, en Uruguay estos grupos se integraron al sistema de partidos”.

Otro de los temas en debate en la órbita de las políticas de inclusión en Uruguay es la ley de protección a personas trans, votada en noviembre de 2018. La misma fue aprobada con el voto mayoritario del Frente Amplio. En marzo de 2019 senadores y diputados del Partido Nacional llevaron a cabo una campaña de recolección de firmas para realizar un referéndum revocatorio de algunos artículos de la ley, el cual terminó fracasando.

En las elecciones de octubre de 2019, los candidatos de los partidos de derecha tradicionales que se presentaron fueron Ernesto Talvi por el Partido Colorado y

² Expresado en el programa televisivo Desayunos Informales, que se emite en Montevideo, el 9 de agosto de 2018.

Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional. En cuanto a Talvi, en sus programas de campaña se propuso, para la órbita social, reformular y revisar las políticas sobre educación, salud, vivienda y urbanismo, integración social, género, discapacidad, adicciones, personas en situación de calle y primera infancia. Su eje central, sin embargo, estuvo en las críticas al sistema educativo y en la política de seguridad. De hecho, su programa de gobierno (Talvi, 2019) sostiene que:

Uruguay sufre una grave fractura social, que genera marginalidad, violencia, delito, consumo y tráfico de drogas e inseguridad. Existe una población vulnerable que vive en los contextos más críticos de nuestro país, personas a las que el sistema educativo ha dejado en el camino. Nuestro sistema no está preparado para enseñarles a quienes no están en condiciones de aprender.

Es decir, la fractura se asocia a la falta de oportunidades educativas y la cara visible es la inseguridad. Ésta no se basaría en situaciones económicas estructurales sino en las capacidades de las personas. El planteo de que la causa de los problemas sociales es la falta de educación es un retorno a la lógica neoliberal de la política social. Del mismo modo, su programa hacía hincapié en quienes viven en barrios vulnerables, los cuales serían los focos de inseguridad y narcotráfico. La apuesta por una política social focalizada no deja de referir al problema del delito como el principal tema a resolver. Asimismo, resulta interesante su propuesta de política previsional, ya que plantea reforzar el pilar de ahorro individual competitivo, base de la argumentación del NL sobre seguridad social, pero sin proponer una reforma radical (Talvi, 2019, p. 32).

En tanto, la campaña de Lacalle Pou hacía fuertes referencias a reducir el déficit fiscal. De hecho, su campaña se organizó en base a cinco shocks, el primero de los cuales es de austeridad y el segundo el de competitividad. El concepto de shock es un recurso de larga data en el ideario neoliberal (Klein, 2007). El cuarto shock –el social– incorpora referencias a las críticas a la política social del gobierno del Frente Amplio y algunas muy sucintas propuestas de reforma. El eje central de este shock (Lacalle Pou, 2019) reside en que:

...una buena política social es aquella que termina por volverse innecesaria. Su propósito es superar la situación de vulnerabilidad mediante la creación de oportuni-

dades y de incentivos que pongan a las personas y a las familias en condiciones de actuar con autonomía para construir su propia felicidad. Las transferencias monetarias son parte del menú de instrumentos, pero nunca deben convertirse en un fin en sí mismo. (p. 142)

Así, se propone que las políticas asistenciales sean focalizadas y transitorias, pues “su objetivo es poner fin a situaciones de vulnerabilidad o de dependencia que son superables”. Y agrega: “Las políticas focalizadas deben atender a situaciones específicas como la marginalidad, la población en situación de calle, las brechas generacionales, la discriminación racial o de género, o la desprotección de la población con discapacidad” (Lacalle Pou, 2019, p. 144). Asimismo, se hace hincapié en la dignidad de la vida, las redes comunitarias y la subsidiariedad del Estado, conceptos propios de la doctrina social de la Iglesia. En este sentido, la reversión discursiva hacia el NL y principalmente hacia los postulados éticos del mismo es mucho más profunda que en el candidato del Partido Colorado.

El shock de austeridad propone ahorrar 900 millones de dólares pero, curiosamente, no pretende reducir el gasto social sino modificarlo. Sin embargo, vale mencionar el análisis que al respecto hace el economista Pablo Da Rocha (2019), según quien

...la propuesta de Luis Lacalle Pou no es realizable y para llevarla a cabo se tendría que ir contra las políticas sociales y por tanto contra los sectores más vulnerables. [...] Creo que hay un discurso que puede ser utilizado con fines electorales en torno a que no habrá recortes, pero después, cuando uno empieza a analizar las propuestas en concreto, parecería ser que todo es por la vía de la reducción del rol del Estado.

En este sentido, el candidato del Partido Colorado focaliza su crítica en la cuestión de la educación, algo propio de un NL más laico, mientras que el candidato del Partido Nacional lo hace desde una visión basada en el cristianismo social, propio de un NL más conservador. En cualquier caso, ninguno de los dos plantea la eliminación de los programas sociales.

Brasil es quizás el caso más claro de una reacción desde el PPNL agresiva y radicalizada, y su presidente Jair Bolsonaro es la más clara expresión de este fenómeno. Su elección estuvo marcada por el *impeachment* que terminó con el segundo mandato de Dilma Rousseff en 2016, el cual, más allá de la exposición mediática en términos de corrupción, tuvo como causa formal el exceso de gasto público. Es decir, la asunción de Bolsonaro no se puede explicar sin una primera reacción basada en la austeridad fiscal.

Su discurso combina la economía del NL en el sentido más clásico con una retórica moralista en materia de derechos, y en particular en materia de derechos sexuales y de inclusión de minorías. Sin ir más lejos, siendo diputado votó en contra de la ley brasileña de inclusión para discapacitados de 2016. Sin embargo, particular ensañamiento ha tenido con las comunidades LGBTTIQ y con las minorías raciales. De hecho, su programa de gobierno hacia la campaña de 2018 se tituló “El camino de la prosperidad”, su lema es “Brasil por sobre todo. Dios por sobre todos”, y comienza sosteniendo: “Proponemos un gobierno decente, diferente de todo aquello que nos llevó a una crisis ética, moral y fiscal” (Bolsonaro, 2018, p. 2).

Entre los principios rectores de la misión de Bolsonaro encontramos la necesidad de “un gobierno que defienda y rescate el bien máspreciado de cualquier ciudadano: la libertad” (Bolsonaro, 2018, p. 2). Asimismo, considera que los problemas más acuciantes del país son la inseguridad y el exceso del gasto, el cual se deriva directamente de la corrupción (Bolsonaro, 2018, p. 12). Finalmente, esto lleva a malos desempeños, por ejemplo, en salud y educación (Bolsonaro, 2018, p. 41).

Así, en este programa encontramos una clara referencia a que se debe dar prioridad a la enseñanza de matemática, ciencias y portugués frente al adoctrinamiento y la sexualización precoz (Bolsonaro, 2018, p. 41). En tanto, “las universidades, en todos los cursos, deben estimular y enseñar el emprendedorismo” (Bolsonaro, 2018, p. 49). Es decir, una clara combinación de un discurso moralista cristiano con la exacerbación del ideario neoliberal. El propio Bolsonaro fue más allá cuando, al ser preguntado en 2011 acerca de qué haría de tener un hijo homosexual, respondió: “eso ni siquiera pasa por mi cabeza, porque han tenido una buena educación. Fui un padre presente, entonces no corro ese riesgo” (El Mundo de España, 2011).

Sin embargo, en el mismo programa se sostiene la necesidad de mantener y ampliar el programa Bolsa Familia (Bolsonaro, 2018, p. 63). Éste fue creado por Lula Da Silva en 2003 y posee actualmente 14 millones de familias beneficiarias. Ya en el gobierno, Bolsonaro manifestó la necesidad de mantener este programa aunque sostuvo, sin embargo, que con él pretendía “la valorización de la familia y los valores cristianos, promoviendo una educación de calidad y sin matices ideológicos” (Radio Nacional del Perú, 2019). Más aun, durante 2019 ha realizado reformas que han incrementado los montos y alcances del programa.

Al mismo tiempo, en cambio, están en agenda una reforma previsional y una nueva reforma laboral que prometen reducir la cobertura a los ancianos y la protección a los trabajadores. Otros programas sociales, como aquellos vinculados a la vivienda o a la agricultura familiar, sí han sido descontinuados. Incluso ha llegado a plantear en sus redes sociales la necesidad de cerrar todas las carreras humanísticas de las universidades. Los primeros meses de gobierno de Bolsonaro han sido mucho menos virulentos que lo que su campaña y principalmente su historia antes de ser candidato a presidente presagiaban. Sin embargo, su discursividad –que combina una retórica abiertamente neoliberal en términos de meritocracia, iniciativa privada y libre mercado con un moralismo cristiano unificador y abiertamente contrario a las minorías– funciona como bandera para grupos similares en otros países de la región.

Por último, en Argentina Mauricio Macri asumió el poder en diciembre de 2015. Su discurso de campaña, principalmente el de los últimos dos meses, estuvo marcado por una extrema moderación. Su promesa de campaña “pobreza cero” se basó, entre otras cosas, en la necesidad de mantener los programas sociales. Sin embargo, a poco de asumir el diagnóstico se transformó. A principios de 2016 el gobierno publicó un documento titulado “El estado del Estado”, cuyo eje central fue el despilfarro y la mala administración de los recursos escasos por parte del kirchnerismo. Dice: “El nuevo gobierno recibió en diciembre de 2015 una situación económica compleja y absolutamente insostenible [...y...] el déficit fiscal [...] había alcanzado una magnitud histórica, de las más altas de los últimos 30 años” (Presidencia de la Nación, 2016, p. 63). En este documento también se sostiene que:

...la política social anterior a diciembre de 2015 estaba basada en la demanda, en el individuo, y no consideraba al núcleo familiar ni contemplaba un trabajo de protección social. Era una política social “universal”, pero sin aplicación focalizada. La administración de los recursos y los programas se realizaba a demanda y no a partir de diagnósticos o prioridades claras. (p. 43)

Es decir, al igual que los representantes de la derecha uruguaya, se critica la falta de focalización de la política social. Durante 2016 y 2017, el gobierno tuvo un claro discurso meritocrático. Por ejemplo, en la campaña legislativa de medio término de 2017 el presidente sostuvo que “lo que te hace feliz no es lo que te regalan, sino lo que conseguís con tu trabajo” (Política Argentina, 2017), en una clara crítica a la política asistencial. En este sentido, también se combinaron argumentos basados en la educación como principal camino de realización personal. Sin embargo, en los hechos el presupuesto educativo se vio reducido año tras año, mientras que la política social a gran escala se mantuvo. De cualquier modo, la alta tasa de inflación que tuvo el país durante todo su mandato, no compensada por aumentos similares de los ingresos de la mayoría de la población –y esto incluye los montos de los programas sociales y jubilaciones–, redundó en una reducción significativa de la protección en términos reales.

En los hechos, hubo durante el gobierno de Macri un manejo muy discrecional y dirigido por cuestiones políticas de los distintos programas de inclusión. Mientras algunos se vieron fuertemente afectados por el ajuste, otros se mantuvieron en pie. El caso que más repercusión tuvo fue el del discontinuado programa Conectar Igualdad, que consistía en la entrega de computadoras a los alumnos de las escuelas públicas. Al respecto, Macri se preguntaba: “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego” (Página/12, 2019).

En octubre de 2019 hubo elecciones nuevamente en Argentina y Mauricio Macri fue derrotado por Alberto Fernández. Esta vez la campaña estuvo fuertemente tensionada por lo que fuera en 2018 el fallido intento de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En este debate, los principales partidos dieron libertad de elección a sus diputados y senadores y de hecho hubo representantes

de ambos tanto del lado verde (a favor) como celeste (en contra). Sin embargo, la postura mayoritaria de los representantes de la Alianza Cambiemos se manifestó en contra y la mayoría de los representantes vinculados al kirchnerismo se manifestó a favor. Los sectores verdes acarreaban años de organización política, mientras que muchos de los celestes se fueron organizando al calor de las discusiones sobre el aborto.

Esta nueva ola celeste ya ha trascendido los debates sobre el aborto y se ha lanzado a cuestionar los derechos consagrados en las leyes de educación sexual integral, identidad de género y matrimonio igualitario y, al igual que en los países vecinos, se sostiene fuertemente en el crecimiento de las iglesias evangélicas en todo el país. Lo interesante es que, al igual que en Brasil, en la mayoría de los casos este discurso celeste se conjuga con un ideario económico profundamente liberal, defensor acérrimo de la propiedad privada y replicador de la lógica discursiva meritocrática que, aquí sí, el gobierno ha replicado y legitimado.

Conclusiones preliminares

En este trabajo hemos intentado discutir algunos alcances del nuevo giro conservador en América del Sur: un debate necesario y urgente en la actualidad. La política social, y en particular las utopías que detrás de ella se despiertan, puede ser un medio claro para entender cómo se configura, en cada ideario, la relación entre el Estado y la sociedad civil. Sin embargo, en esta sección nos vemos obligados a plantear más preguntas que respuestas.

El PPNL de América del Sur está mostrando un fuerte avance de un conservadurismo social que se viste de disidente (o rebelde), asociado al crecimiento de las iglesias evangélicas, con una fuerte reacción de los grandes grupos económicos en defensa de sus privilegios bajo retóricas clásicas NL. Sin embargo, en muchos casos esta nueva conjunción encuentra obstáculos políticos muy concretos: en los sectores que han sostenido los procesos de PNL y que se identifican en sus proyectos y organizaciones, pero también en los sectores vinculados al NL más clásico. A veces parece que cuando la derecha de siempre se vuelca hacia estas ideas radicalizando sus argumentos en contra de los regímenes de izquierda ésta logra ser exitosa. El

caso argentino, donde Mauricio Macri al girar hacia un discurso de derecha más radicalizado logró subir de 33 a 41 el porcentaje de votos entre las elecciones primarias y las generales, parece darle la razón a este argumento. En Brasil, la figura extravagante de Bolsonaro permitió resolver estas tensiones hacia la extremísima derecha. En Argentina y Chile, los presidentes de derecha han tenido que buscar la manera de acoger en su seno a las distintas facciones. En Uruguay, la oposición de derecha que acaba de ganar las elecciones debe dirimir sus diferencias internas.

Por el otro lado, la izquierda está ante el desafío de una nueva derecha popular que no lo es solo mediáticamente, sino que está enraizada en organizaciones barriales, vecinales y comunitarias. Ante el crecimiento de este nuevo conservadurismo moral popular, ¿cuál ha de ser la reacción tanto de la izquierda como de la derecha de siempre?

Volviendo a nuestro esquema teórico: ¿cómo podemos pensar la relación entre política social y utopías en el PPNL? ¿Se mantiene la utopía de la heterogeneidad social? Ciertamente sí, y se ha exacerbado desde el punto de vista económico. Pero presenciamos una reacción contra la inclusión en la diversidad del PNL que se verifica en los discursos contrarios a la educación sexual, a la identidad de género y a los colectivos sexualmente disidentes. Si el PNL proponía una inclusión en la diversidad, el PPNL parece proponer la inclusión en la homogeneidad, pero manteniendo, eso sí, una economía que nos diferencia de acuerdo a nuestros méritos.

¿Y qué sucede con la política social? Lo curioso es que parece mantenerse relativamente inalterada respecto al período anterior. En algunos casos hay discursos que nos retrotraen a los 90 y a la necesidad de una mayor focalización o limitación temporal. En muchos casos, los planes de ajuste necesariamente incluyen una reducción de la protección social. Sin embargo, nadie propone eliminarla. ¿Es por mera especulación electoral? ¿O es que el PPNL de alguna manera está reconociendo que algunas de las conquistas del PNL han sido fijadas y legitimadas más allá de las coyunturas políticas?

Por último, y volviendo a los acontecimientos más recientes, la pregunta que nos hacemos todos es si el PPNL es una fase breve de giro conservador en el medio

de un largo proceso PNL o si, por el contrario, el PNL fue una excepción en un larguísimo ciclo del NL en América Latina. La mayoría de las respuestas a estas preguntas se irán desandando en los próximos meses, años y, quizás, décadas.

Referencias

a) Bibliografía

- Draibe, S. (1994). Neoliberalismo y políticas sociales: reflexiones a partir de las experiencias latinoamericanas. *Desarrollo Económico*, 34(134), 181-196.
- Dvoskin, N. (2014). Los jubilados al mercado: una genealogía teórica de la propuesta neoliberal de reforma previsional entre los 50 y los 70 y su arribo en Argentina. *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(1), 101-122.
- Dvoskin, N. (2019a). El anarcoliberalismo como terraplanismo económico. *Cuadernos de Economía Crítica*, 5(10), 159-168.
- Dvoskin, N. (2019b). *Old and new developmentalism in Latin America: social order, social welfare and social security fifty years later*. Ponencia presentada en Development Studies Association Conference: Opening up Development, Open University, Milton Keynes, Reino Unido.
- Felder, R. (2007). Auge y crisis de las reformas neoliberales y transformación del estado en Argentina. En A. Fernández (Ed.), *Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Buenos Aires.
- Klein, N. (2007). *The shock doctrine. The rise of disaster capitalism*. Toronto: Random House of Canada.
- Larrañaga, O., Contreras, D., y Cabezas, G. (2015). *Políticas contra la pobreza: de Chile Solidario al Ingreso Ético Familiar*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- López Segrera, F. (2016). *América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS y CLACSO.

Rofman, R., Apella, I., y Vezza, E. (2014). *Beyond contributory pensions: Fourteen experiences with coverage expansion in Latin America*. Washington: Banco Mundial.

Sader, E. (2008). *Refundar el Estado. Posneoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires: Ediciones CTA y CLACSO.

Seers, D. (1970). The meaning of development. *Revista Brasileira de Economia*, 24(3), 29-50.

Spronk, S. (2008). Pink tide? Neoliberalism and its alternatives in Latin America. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 33(65), 173-186.

Vilas, C. (1997). De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo. *Desarrollo Económico*, 36(144), 931-952.

b) Documentos oficiales

Banco Mundial (1997). *Informe sobre el desarrollo mundial 1997: el estado en un mundo en transformación*. Washington: Banco Mundial.

Bolsonaro, J. (2018). *O caminho da prosperidade. Proposta de plano do governo*, Brasilia. Recuperado de: <http://flaviobolsonaro.com/>.

Lacalle Pou, L. (2019). *Programa 20_25. Acciones de gobierno*, Montevideo. Recuperado de: <http://lacallepou.uy/>.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2020). *Programa oficial*. Recuperado de: <http://familia.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/>.

Piñera, S. (2017). *Programa de gobierno 2018-2022: construyamos tiempos mejores para Chile*, Santiago de Chile. Recuperado de: <http://programa.sebastianpinera.cl/>.

Presidencia de la Nación (2016). *El estado del Estado. Diagnóstico de la administración pública en diciembre de 2015*. Recuperado de: https://www.sigen.gob.ar/pdfs/el_estado_del_estado.pdf.

Talvi, E. (2019). *Un pequeño país modelo. Programa de gobierno de ciudadanos 2020-2025*. Recuperado de: <https://www.talvi.uy/>.

c) Medios de comunicación y redes sociales

Barrios, L. (12 de mayo de 2019). Políticas sociales ponen en aprietos al programa electoral de Luis Lacalle Pou. *Caras y Caretas*. Recuperado de: <https://www.carasycaretas.com.uy/politicas-sociales-luis-lacalle-pou/>.

Bolsonaro, J. (26 de abril de 2019). O Ministro da Educação @abrahamWeinT estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia (humanas). Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e medicina. [Publicación en Twitter]. Recuperado de: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1121713997156425729?ref_src=twsrc%5Etfw.

Bolsonaro mantendrá el programa Bolsa Familia en Brasil. (12 de abril de 2019). *Radio Nacional de Perú*. Recuperado de: <http://www.radionacional.com.pe/informa/internacionales/bolsonaro-mantendra-el-programa-bolsa-familia-en-brasil>.

Macri insistió con la meritocracia: “Lo que te hace feliz no es lo que te regalan”. (3 de octubre de 2017). *Política Argentina*. Recuperado de: <http://www.politicargentina.com/notas/201710/22959-macri-insistio-con-la-meritocracia-lo-que-te-hace-feliz-no-es-lo-que-te-regalan.html>.

Mauricio Macri comparó la entrega de notebooks de Conectar Igualdad con “repartir asado”. (23 de mayo de 2019). *Página/12*. Recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/195399-mauricio-macri-comparo-la-entrega-de-notebooks-de-conectar-i>.

Matrimonio igualitario es ley en Uruguay por 71 votos a favor. (10 de abril de 2013). *Uy.Press*. Recuperado de: <https://www.uypress.net/auc.aspx?39165,91>.

Pintado, S. (23 de agosto de 2014). Blancos Diversos: políticas LGBT dentro del Partido Nacional. *Montevideo Portal*. Recuperado de: <https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Blancos-Diversos-politicas-LGBT-dentro-del-Partido-Nacional-uc244927>.

Piñera, S. (24 de mayo de 2014). Eso es terapia y no aborto, pues el objetivo es salvar vida madre y no destruir vida de un nuevo ser, esencialmente inocente y vulnerable [Publicación en Twitter]. Recuperado de: <https://twitter.com/sebastianpinera/status/469177269077180416>.

100 Tejero, L. (31 de marzo de 2011). “Mis hijos nunca serán gays ni tendrán novias negras. Los he educado muy bien”. *El Mundo de España*. Recuperado de: <https://www.el-mundo.es/america/2011/03/30/brasil/1301507613.html>

Uval, N. (27 de octubre de 2018). Religión y política en el Partido Nacional. *La Diaria*. Recuperado de: <https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/10/religion-y-politica-en-el-partido-nacional>.